

Argentina frente a un Límite Demográfico Estructural (2026–2050)

Impacto sobre Desarrollo, Jubilaciones, Salud y la Sostenibilidad del Transporte de Cargas

La tasa global de fecundidad —definida como el número promedio de hijos que tendría una mujer a lo largo de su vida reproductiva— constituye uno de los indicadores estructurales más relevantes para el análisis del desarrollo económico, social y estratégico de un país. En términos demográficos, se considera que una sociedad requiere una tasa mínima cercana a 2,1 hijos por mujer para garantizar el reemplazo generacional y la estabilidad de su población a largo plazo, en ausencia de flujos migratorios compensatorios. Cuando este umbral no se alcanza de forma sostenida, el país ingresa en una dinámica de envejecimiento acelerado y reducción progresiva de su población en edad activa, con efectos sistémicos sobre la economía y la organización social.

Para un país en vías de desarrollo como Argentina, la relevancia de este indicador es particularmente crítica. A diferencia de las economías avanzadas —que cuentan con elevados niveles de productividad, sistemas de capital intensivo y amplios márgenes fiscales—, las economías emergentes dependen en mayor medida de la disponibilidad de fuerza de trabajo, del crecimiento del mercado interno y de una relación equilibrada entre la población activa y la población dependiente. Una tasa de fecundidad persistentemente baja compromete estos pilares, limita el potencial de crecimiento económico, restringe la capacidad de financiamiento del Estado y agrava las tensiones distributivas intergeneracionales.

Desde el punto de vista macroeconómico, una fecundidad por debajo del nivel de reemplazo impacta directamente en la oferta futura de trabajo, reduciendo la base de contribuyentes y presionando sobre los sistemas previsionales, de salud y de asistencia social. Este fenómeno se vuelve especialmente problemático en contextos donde dichos sistemas aún no han alcanzado altos niveles de capitalización ni cuentan con reservas demográficas acumuladas. En consecuencia, el envejecimiento poblacional se traduce en mayores cargas fiscales sobre cohortes laborales cada vez más reducidas, lo que debilita la sostenibilidad de las finanzas públicas y la capacidad del Estado para invertir en infraestructura, educación y desarrollo productivo.

Asimismo, la dinámica demográfica influye directamente en el crecimiento del mercado interno, un componente clave para economías como la de Argentina, donde el consumo doméstico continúa siendo un motor central de la actividad económica.

La reducción del número de nacimientos no solo implica menos trabajadores en el futuro, sino también menos hogares jóvenes, menor demanda estructural de bienes durables, vivienda, educación y servicios asociados a las primeras etapas del ciclo de vida, lo que afecta la vitalidad económica a mediano y largo plazo.

Desde una perspectiva estratégica, la fecundidad también se vincula con variables de seguridad nacional, de cohesión social y de proyección de poder relativo. El tamaño y la estructura de la población condicionan la capacidad de un país para sostener fuerzas armadas, sistemas de protección social, cadenas logísticas y niveles adecuados de resiliencia ante crisis económicas, sanitarias o geopolíticas. En este sentido, la demografía actúa como un multiplicador —o reductor— silencioso del poder nacional, particularmente relevante en regiones donde los países compiten por atraer inversiones, retener capital humano y mantener su peso relativo en el escenario internacional.

La población como recurso estratégico: una variable frecuentemente subestimada

La población constituye uno de los recursos estratégicos más fundamentales para los Estados, aunque con frecuencia su importancia se subestima frente a variables más visibles como el capital financiero, la infraestructura o la tecnología. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que la magnitud, la estructura y la dinámica de la población condicionan de manera decisiva la capacidad de un país para crecer, innovar y sostener procesos de desarrollo económico a largo plazo. La población no debe entenderse únicamente como un dato estadístico, sino como un activo productivo que, con el paso del tiempo, se traduce en fuerza de trabajo, capital humano, emprendedores, innovadores y consumidores, todos ellos elementos indispensables para la expansión económica.

Los grandes ciclos de crecimiento del siglo XX evidencian con claridad esta relación. Tras la Segunda Guerra Mundial, numerosos países europeos experimentaron un marcado aumento de la natalidad, conocido como el baby boom. Durante los primeros años, este fenómeno implicó mayores demandas sociales y de infraestructura, pero sus efectos económicos más relevantes se manifestaron décadas después, cuando esas generaciones alcanzaron la edad económicamente activa. A partir de los años sesenta y setenta, Europa Occidental incorporó masivamente al mercado laboral una población numerosa y joven, lo que permitió ampliar la base productiva, incrementar la productividad, sostener la expansión industrial y consolidar sistemas de protección social financiados por una relación favorable entre trabajadores y dependientes. Este proceso fue un componente

estructural del crecimiento sostenido y de la reconstrucción económica europea de la posguerra.

Un patrón similar se observa en los Estados Unidos. El baby boom estadounidense dio lugar, a partir de mediados del siglo XX, a una expansión significativa de la población en edad de trabajar, lo que coincidió con un período de fuerte crecimiento económico, desarrollo tecnológico y expansión del consumo interno. La existencia de una masa crítica de población activa facilitó la creación de empresas, el surgimiento de nuevos sectores productivos, el aumento de la innovación y la consolidación de un mercado interno amplio y dinámico. La abundancia relativa de mano de obra y de capital humano permitió escalar rápidamente los procesos productivos y absorber los riesgos asociados a la inversión y al cambio tecnológico.

El caso de China refuerza esta lógica desde una perspectiva distinta. A partir de las reformas económicas iniciadas a fines de los años setenta, el país contó con una población en crecimiento exponencial que, al ingresar progresivamente al mercado laboral, se convirtió en uno de los principales motores de su crecimiento acelerado. La disponibilidad de cientos de millones de trabajadores en edad activa fue un factor clave para el desarrollo industrial, la atracción de inversiones, la expansión exportadora y el aumento sostenido de la productividad. Aunque este proceso estuvo acompañado por particularidades institucionales y políticas propias, la variable demográfica actuó como un multiplicador central del crecimiento económico chino durante varias décadas.

En todos estos casos, el denominador común fue la existencia de una población abundante que, en el momento oportuno, ingresó al sistema productivo y amplió significativamente la capacidad económica de los países involucrados. La ausencia de estos procesos demográficos reduce considerablemente la probabilidad de experimentar ciclos de crecimiento acelerado similares. Sin una base poblacional suficiente y en edad activa, se restringe la oferta de trabajo, se limita el surgimiento de emprendedores y profesionales, se reduce la capacidad de innovación y se achica el mercado interno, lo que elimina una de las variables estructurales esenciales para el desarrollo económico sostenido. En este sentido, la población no es un factor accesorio, sino una condición necesaria —aunque no suficiente— para la posibilidad misma de un gran boom económico.

Límites estructurales a la reversión de la fecundidad en sociedades modernas

La evidencia histórica y demográfica acumulada a nivel global indica que, una vez que un país desciende de manera sostenida por debajo de una tasa de fecundidad

cercana a 1,9 hijos por mujer, las posibilidades de revertir esa trayectoria hasta el nivel de reemplazo poblacional se reducen drásticamente. De hecho, no existen casos documentados de países que hayan logrado, de forma sostenida y estructural en el largo plazo, recuperar una fecundidad igual o superior a 2,1 hijos por mujer luego de haber caído por debajo de ese umbral. Esta constatación empírica ha llevado a numerosos estudios demográficos a considerar el valor de 1,9 como un punto de no retorno operativo en las sociedades modernas.

Los países que alcanzaron niveles de fecundidad muy bajos durante la segunda mitad del siglo XX ilustran con claridad esta dinámica. Japón descendió por debajo de 1,9 a mediados de la década de 1970 y, pese a múltiples intentos de políticas de incentivo a la natalidad, nunca logró una recuperación sostenida, estabilizándose durante décadas en valores bajos y alcanzando en la actualidad una tasa cercana a 1,2 hijos por mujer, una de las más reducidas del mundo.¹ Italia y España atravesaron trayectorias similares desde los años ochenta y noventa; tras caer por debajo del umbral crítico, experimentaron solo oscilaciones marginales que no modificaron la tendencia estructural, registrando hoy tasas aproximadas de 1,2² y 1,3³ hijos por mujer, respectivamente. Alemania, aun con amplios programas de transferencias directas, licencias parentales extendidas y políticas de conciliación entre la vida laboral y la familiar, solo consiguió repuntes transitorios, manteniéndose actualmente en torno a 1,4⁴ hijos por mujer, sin alcanzar nuevamente el nivel de reemplazo. Incluso Francia, frecuentemente citada como un caso relativamente exitoso, nunca logró consolidar una fecundidad sostenida por encima de 2,1 una vez iniciada la transición hacia valores más bajos, y tras años cercanos a 1,9–2,0, registra en la actualidad una tasa aproximada de 1,6 hijos por mujer⁵, lo que explica su desempeño más por haber evitado un colapso profundo que por una reversión efectiva de la tendencia demográfica.

Esta regularidad histórica sugiere que el problema no reside únicamente en la ausencia de políticas adecuadas, sino en la transformación estructural de las sociedades que acompañan la caída de la fecundidad. Una vez que se consolidan cambios en la edad de formación de familias, en los patrones culturales, en la inserción laboral femenina, en los costos relativos de crianza y en las expectativas individuales respecto de la maternidad y la paternidad, el número de hijos deseado tiende a reducirse de forma persistente. En ese contexto, los incentivos económicos

¹ Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar del Japón, 2024.

² Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), 2025.

³ Instituto Nacional de Estadística (INE), 2025.

⁴ Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024.

⁵ Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), 2025.

pueden atenuar el descenso o generar repuntes marginales, pero no revertir la tendencia de fondo.

Cuando la fecundidad desciende aún más, hacia valores cercanos a 1,3 hijos por mujer, el fenómeno adquiere una dimensión adicional que trasciende lo cultural y se vuelve también demográfica y matemáticamente restrictiva en términos prácticos. A esos niveles, la estructura etaria del país ya se encuentra profundamente alterada: cada cohorte de mujeres en edad fértil es significativamente más pequeña que la anterior, lo que reduce de manera acumulativa el número absoluto de nacimientos posibles incluso si la fecundidad individual aumentara. Esta inercia demográfica negativa implica que, aun bajo supuestos extremadamente optimistas —como un aumento abrupto y generalizado del número de hijos por mujer—, la masa crítica de población necesaria para sostener una recuperación estructural simplemente no existe.

Además, la realidad biológica y social impone límites concretos. En sociedades con una fecundidad de 1,3, la maternidad suele postergarse hasta edades en las que la ventana reproductiva efectiva es más corta, lo que restringe la posibilidad de tener más hijos, incluso entre quienes lo desearían. La combinación de menos mujeres en edad fértil, una mayor proporción de mujeres sin hijos o con hijo único, y una reducción de la fecundidad acumulada por generación hace que la recuperación deje de ser una hipótesis teórica y pase a ser, en la práctica, inviable.

Por estas razones, una fecundidad de 1,3 no solo refleja un problema coyuntural, sino que señala una trayectoria de declive poblacional estructural, en la que el país queda demográficamente condicionado a un proceso de reducción y envejecimiento de su población. A partir de este punto, la población deja de ser un factor de expansión potencial y se convierte en una restricción permanente para el crecimiento económico, la sostenibilidad fiscal y la proyección a largo plazo del país, lo que consolida una dinámica de estancamiento o contracción difícilmente reversible bajo las condiciones actuales de las sociedades modernas.

Caso Argentino

El caso argentino presenta características particularmente preocupantes en este marco analítico. En Argentina, la tasa global de fecundidad se ubica en torno a 1,5 hijos por mujer en 2025, tras haber registrado una caída abrupta y acelerada en muy pocos años. A comienzos de la década de 2010, el país aún mantenía niveles cercanos a 2,3–2,4 hijos por mujer, compatibles con el reemplazo generacional. Sin embargo, en el transcurso de poco más de una década, la fecundidad descendió de

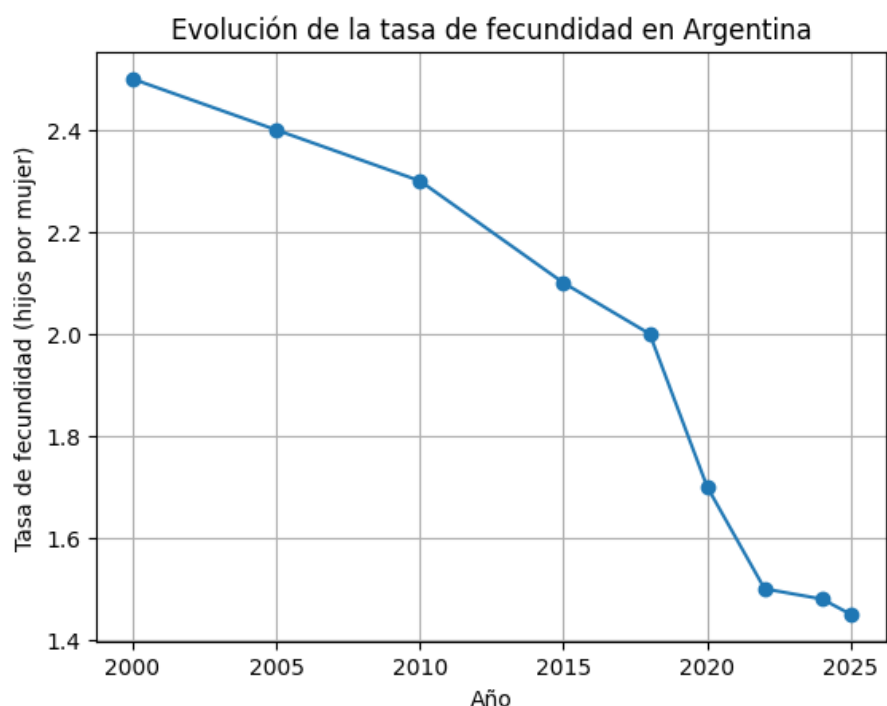
forma sostenida y profunda, atravesando el umbral de 2,1, luego el de 1,9, y aproximándose rápidamente a niveles propios de países con transiciones demográficas avanzadas. Este ritmo de descenso resulta particularmente significativo por su velocidad, ya que comprimió en pocos años un proceso que en otros países tomó varias décadas. Esta velocidad de caída constituye un rasgo distintivo del caso argentino y agrava sus implicancias estructurales, ya que reduce significativamente los márgenes temporales para la adaptación económica, fiscal y social, consolidando una dinámica demográfica adversa antes de que el país haya alcanzado niveles de desarrollo que permitan absorber sus efectos.

Este nivel actual se encuentra claramente por debajo del umbral de reemplazo poblacional y peligrosamente próximo al rango que, según la evidencia empírica internacional, constituye un punto de no retorno demográfico. A diferencia de otros países que atravesaron procesos similares luego de alcanzar altos niveles de desarrollo económico, Argentina enfrenta esta transición en una condición estructuralmente más vulnerable. La reducción de la fecundidad no se produjo tras un largo período de crecimiento sostenido y acumulación de capital, sino en paralelo a un contexto de estancamiento económico, volatilidad macroeconómica y deterioro de las condiciones sociales.

El principal agravante radica en que Argentina es aún un país en vías de desarrollo y no ha experimentado, en términos históricos, un boom económico-demográfico comparable al de Europa occidental en la posguerra, al de Estados Unidos durante el baby boom, o al de China en las décadas finales del siglo XX. Mientras que esos países ingresaron en la etapa de baja fecundidad luego de haber acumulado infraestructura, productividad, capital humano y sistemas de bienestar relativamente sólidos, Argentina lo hace con niveles de ingreso per cápita medios, elevada informalidad laboral, restricciones fiscales persistentes y déficits estructurales en materia de inversión y competitividad. En este contexto, la caída de la fecundidad no representa el cierre de un ciclo de desarrollo exitoso, sino la erosión anticipada de uno de los factores esenciales que aún podrían haber impulsado un proceso de crecimiento sostenido.

Las implicancias a futuro son profundas. Una fecundidad persistente baja anticipa una reducción progresiva de la población en edad económicamente activa, lo que limitará la oferta de trabajo, restringirá la capacidad de expansión productiva y reducirá el dinamismo del mercado interno. Al mismo tiempo, el envejecimiento poblacional incrementará la presión sobre los sistemas previsionales, de salud y de asistencia social, que ya hoy presentan serias dificultades de financiamiento y de cobertura. Esta combinación —menos trabajadores futuros y más población

dependiente— configura un escenario especialmente desafiante para un Estado con márgenes fiscales reducidos y una alta dependencia del crecimiento económico para sostener la cohesión social.



6

Medidas para contener el declive demográfico

Frente a la caída acelerada de la fecundidad y al riesgo de consolidar una trayectoria demográfica estructuralmente adversa, el margen de acción de la política pública no debe entenderse en términos de una reversión plena del proceso, sino como la posibilidad de detener el descenso, reducir la brecha entre hijos deseados e hijos efectivamente tenidos y evitar que la fecundidad converja hacia niveles cercanos a 1,3 hijos por mujer. La experiencia internacional demuestra que no existen soluciones únicas ni inmediatas, pero sí combinaciones de medidas que, aplicadas de forma consistente, pueden atenuar el deterioro demográfico.

En el caso argentino, un primer eje de intervención se vincula con la reducción del costo económico directo de la crianza, especialmente a partir del segundo hijo, en el que se observa la mayor caída en la fecundidad. Transferencias monetarias focalizadas, deducciones fiscales y esquemas de apoyo automático y de bajo costo administrativo pueden contribuir a aliviar las restricciones económicas que enfrentan

⁶ United Nations Population Fund, *World Population Dashboard – Argentina: Total fertility rate, 2025*.

los hogares, particularmente en los sectores medios y en contextos de alta informalidad laboral. No se trata únicamente de aumentar el gasto, sino de mejorar su eficacia y previsibilidad, reduciendo la incertidumbre asociada a la decisión de formar o ampliar una familia.

Un segundo componente central es la expansión de los sistemas de cuidado infantil compatibles con la inserción laboral, especialmente para niños de 0 a 3 años. La disponibilidad de jardines maternos y espacios de cuidado con horarios acordes con la jornada de trabajo constituye una de las políticas con mayor impacto potencial, al reducir el conflicto entre maternidad, paternidad y empleo. En ausencia de una oferta suficiente, esquemas de subsidio a la demanda pueden funcionar como soluciones transitorias que eviten demoras estructurales asociadas a la construcción de infraestructura.

Asimismo, resulta clave avanzar en políticas de conciliación entre la vida laboral y la familiar que no penalicen la participación femenina en el mercado de trabajo. La ampliación de licencias por paternidad, la flexibilización de las modalidades laborales para familias con hijos pequeños y la protección efectiva frente a la discriminación laboral asociada a la maternidad pueden contribuir a redistribuir los costos de la crianza y a reducir los incentivos implícitos a postergar o evitar la decisión de tener hijos.

Otro factor crítico en el contexto argentino es el acceso a la vivienda, que actúa como un cuello de botella significativo para la decisión de tener un segundo o un tercer hijo. La inestabilidad del mercado de alquileres y la falta de crédito hipotecario accesible incrementan la percepción de riesgo asociada a la ampliación del hogar. En este sentido, mecanismos de garantía estatal, programas de apoyo a la ampliación habitacional y criterios de prioridad para familias con hijos pueden contribuir a mitigar esta restricción estructural.

Complementariamente, las políticas de salud reproductiva y de fertilidad cobran relevancia en un contexto de creciente postergación de la maternidad. La reducción de las barreras de acceso a tratamientos de fertilidad, junto con información clara y no estigmatizante sobre la ventana reproductiva, puede ayudar a evitar que la demora en el primer hijo limite de manera irreversible la fecundidad final por cohorte.

Estas medidas, sin embargo, se ven condicionadas por el entorno macroeconómico. En un país caracterizado por alta volatilidad, inflación persistente e incertidumbre laboral, la decisión de tener hijos resulta particularmente sensible a la previsibilidad de los ingresos y los costos. Por ello, aun sin resolver de manera integral los

desequilibrios macroeconómicos, resulta relevante introducir esquemas que otorguen mayor estabilidad a las prestaciones familiares y reduzcan la volatilidad de los gastos asociados a la crianza.

Finalmente, ante la probabilidad de que la fecundidad se mantenga por debajo del nivel de reemplazo, una política migratoria activa y ordenada puede funcionar como complemento para sostener la población en edad activa y amortiguar los efectos económicos del envejecimiento. Si bien la migración no sustituye una política demográfica de largo plazo, puede contribuir a ganar tiempo y a preservar capacidades productivas mientras se implementan medidas orientadas a frenar el deterioro de la fecundidad.

Estas políticas no garantizan una recuperación plena de la tasa de fecundidad, pero sí pueden incidir de manera significativa en la desaceleración de su caída y en la mitigación de sus impactos económicos y sociales. En el contexto argentino, el objetivo realista no consiste en revertir la restricción demográfica estructural ya instalada, sino en evitar su profundización acelerada y preservar, en la medida de lo posible, a la población como recurso estratégico para el desarrollo futuro del país.

Conclusiones

El análisis desarrollado a lo largo de este informe permite concluir que la tasa global de fecundidad constituye una variable estructural central para el desarrollo económico, social y estratégico de los países, cuyos efectos se manifiestan con rezagos temporales, pero con consecuencias profundas y persistentes. Mantener niveles cercanos al reemplazo generacional no es únicamente una cuestión demográfica, sino una condición necesaria para sostener la población en edad activa, el dinamismo del mercado interno, la sostenibilidad fiscal y la capacidad de proyección a largo plazo del Estado.

La evidencia histórica internacional demuestra que los grandes ciclos de crecimiento económico estuvieron asociados a la incorporación masiva de cohortes numerosas al mercado laboral, como ocurrió en Europa occidental y Estados Unidos tras el baby boom de posguerra, y en China durante su proceso de industrialización acelerada. En contraste, la ausencia de estos procesos reduce significativamente la probabilidad de experimentar booms económicos comparables, al eliminar uno de los factores estructurales esenciales para la expansión productiva: una población abundante, joven y activa.

Asimismo, el relevamiento comparado de experiencias internacionales confirma la existencia de límites estructurales a la reversión de la fecundidad en sociedades modernas. Ningún país ha logrado, de manera sostenida, retornar al nivel de reemplazo poblacional tras haber descendido por debajo de una tasa cercana a 1,9 hijos por mujer. Una vez consolidados los cambios culturales, económicos y laborales asociados a la baja fecundidad, las políticas públicas solo han demostrado capacidad para atenuar el descenso o generar repuntes marginales, pero no para revertir la tendencia de fondo. Cuando la fecundidad cae hacia valores cercanos a 1,3, la combinación de inercia demográfica, restricciones biológicas y cambios sociales convierte la recuperación en una hipótesis prácticamente inviable.

En este marco, el caso argentino resulta particularmente crítico. La caída abrupta de la fecundidad en un período muy corto —desde niveles compatibles con el reemplazo a valores cercanos a 1,5 hijos por mujer en poco más de una década— coloca al país en una situación de alta vulnerabilidad demográfica. A diferencia de las economías avanzadas, Argentina enfrenta esta transición sin haber alcanzado previamente un nivel de desarrollo económico, productividad e infraestructura que permita absorber los efectos del envejecimiento poblacional y la reducción de la población activa. La convergencia hacia tasas de fecundidad propias de países desarrollados, sin haber completado el proceso de desarrollo, configura una anomalía estructural que limita severamente las perspectivas de crecimiento futuro.

Las implicancias de esta trayectoria son claras: una reducción progresiva de la fuerza de trabajo, mayores presiones sobre los sistemas previsionales y de salud, menor dinamismo del mercado interno y un deterioro de la capacidad fiscal del Estado. En términos estratégicos, la población deja de actuar como un recurso multiplicador del desarrollo y pasa a ser una restricción adicional, lo que condiciona el margen de maniobra económico y social del país a largo plazo.

Frente a este escenario, las políticas públicas no deben plantearse objetivos irreales de reversión plena de la fecundidad, sino metas más acotadas y pragmáticas: detener la caída, evitar la convergencia hacia niveles cercanos a 1,3 hijos por mujer y reducir la brecha entre los hijos deseados y los efectivamente tenidos. Medidas orientadas a reducir el costo de la crianza, mejorar la conciliación entre la vida laboral y la familiar, ampliar la oferta de cuidados infantiles, facilitar el acceso a la vivienda y garantizar una mayor previsibilidad económica pueden contribuir a mitigar el deterioro demográfico. Complementariamente, una política migratoria activa puede funcionar como una herramienta transitoria para sostener a la población en edad activa.

El límite demográfico que enfrenta Argentina no constituye un fenómeno coyuntural ni fácilmente reversible, sino un desafío estructural de largo plazo. Reconocer a la población como un recurso estratégico y actuar en consecuencia resulta indispensable para preservar las condiciones mínimas de desarrollo económico, de cohesión social y de sostenibilidad del Estado en las próximas décadas.

Anexo

Stress Test Demográfico 2026–2050 Brecha Financiera Proyectada y Escenarios Sectoriales

Transporte de Cargas en Argentina bajo fecundidad persistente de 1,5 hijos por mujer

1. Marco estructural (Año base: 2026)

En 2026, Argentina se encuentra en una fase avanzada de restricción demográfica estructural con una tasa global de fecundidad cercana a 1,5 hijos por mujer (Naciones Unidas, Revisión 2024).¹

La población de 65 años y más representa aproximadamente el 12–13% del total y superará el 20% hacia 2050 bajo el escenario medio. La tasa de dependencia de los adultos mayores se duplicará en ese período.

Este fenómeno se debe a cohortes ya nacidas. No es reversible en términos demográficos estructurales dentro del horizonte 2026–2050.

El efecto central es una contracción relativa de la base activa frente a un aumento sostenido del número de beneficiarios previsionales y del gasto sanitario por afiliado.

2. Stress Test previsional nacional

2.1 Situación aproximada 2026

- Prestaciones previsionales: ~7 millones (ANSES 2023–2025).²
- Informalidad laboral: ~35–40% (INDEC 2024–2025).³
- Ratio estimado aportantes efectivos / beneficiarios: ~2,5–2,6.

Este nivel ya es inferior al observado en décadas anteriores.

2.2 Proyección demográfica 2035–2050

Bajo escenario medio ONU:

- 65+ >20% hacia 2050.
- Población 15–64 se reduce proporcionalmente.
- Ratio proyectado hacia 2050: ~1,8 aportantes por beneficiario.

La literatura comparada indica que por debajo de 2 a 1 los sistemas PAYG requieren ajustes paramétricos significativos (OCDE 2023; FMI 2024).^{4 5}

La fase de mayor tensión se concentra entre 2035 y 2045.

3. Cálculo explícito de brecha financiera previsional (escenario inercial)

Para estimar una brecha estructural simplificada se utilizan supuestos conservadores.

3.1 Supuestos base (2026)

- Jubilados: 7 millones.
- Haber promedio real indexado constante.
- Aportes promedio reales constantes.
- Ratio actual: 2,5.

Si cada beneficiario requiere el equivalente a 1 unidad financiera anual, el sistema necesita 7 millones de unidades.

Con ratio 2,5, los aportantes necesarios son 17,5 millones de unidades contributivas (simplificación proporcional).

3.2 Escenario 2040–2045

Supuestos coherentes con ONU:

- Jubilados proyectados: 8,5–9 millones.
- Ratio proyectado: 1,8.

Con 9 millones de beneficiarios y ratio 1,8:

Aportantes efectivos necesarios $\approx$ 16,2 millones.

Pero si el número de aportantes reales no supera 16 millones (proyección coherente con reducción proporcional de población activa), la brecha surge por dos vías:

1. Aportes por trabajador deben aumentar.
2. El sistema requiere un subsidio fiscal adicional.

3.3 Estimación simplificada de brecha

Comparando el escenario base con el escenario proyectado:

Escenario 2026

7 millones $\times$ 1 unidad = 7 millones de unidades requeridas, financiadas por 17,5 millones de unidades contributivas bajo un ratio de 2,5 aportantes por beneficiario.

Escenario 2040–2045 (proyección)

9 millones $\times$ 1 unidad = 9 millones de unidades requeridas.

Si el número de aportantes efectivos se reduce a aproximadamente 16 millones — en línea con la contracción proyectada de la población activa— y se mantiene la hipótesis proporcional adoptada en este modelo simplificado (una unidad contributiva promedio por trabajador), la capacidad contributiva agregada disminuye en términos relativos mientras las obligaciones previsionales aumentan.

El elemento estructural central no es únicamente el incremento del número de beneficiarios, sino la caída del ratio aportante/beneficiario de 2,5 a 1,8.

En términos relativos dentro de este esquema simplificado, esa variación implica un incremento aproximado del 39% en la carga contributiva por trabajador:

$$(2,5 / 1,8 \approx 1,39)$$

Es decir, para sostener constantes los parámetros reales del sistema, cada trabajador debería financiar aproximadamente 39% más en términos relativos que en 2026.

Si ese incremento no se materializa mediante mayores niveles de productividad, ampliación efectiva de la base contributiva o aumentos explícitos de aportes, la diferencia necesariamente se traducirá en:

- Mayor déficit fiscal
- Reducción del haber real promedio
- Reformas paramétricas (edad jubilatoria, fórmula de actualización o años de aporte).

El FMI estima que el envejecimiento puede incrementar el gasto previsional entre 2 y 4 puntos del PBI en economías emergentes en horizontes de dos décadas.⁵ Ese rango resulta consistente con el orden de magnitud del ajuste implícito en la simulación anterior.

En consecuencia, la cuestión determinante no es si habrá ajuste, sino bajo qué reglas institucionales, con qué distribución intergeneracional de costos y en qué momento se producirá.

4. Brecha sanitaria estructural

La OMS establece que el gasto sanitario per cápita en mayores de 65 años puede multiplicar entre tres y cinco veces el gasto de adultos jóvenes.⁶

Si la proporción de 65+ pasa de 12% a 20%:

Simulación conservadora:

- Costo promedio ponderado aumenta ~18–25% exclusivamente por envejecimiento.

En el transporte de cargas, donde la prevalencia de patologías crónicas es superior al promedio administrativo, el aumento podría ubicarse en el extremo superior del rango.

Si el gasto sanitario sectorial aumenta un 25 % en términos reales estructurales hacia 2040 y la masa salarial no crece en la misma proporción real, la brecha financiera se amplifica.

Este componente no es discrecional.

5. Impacto específico en transporte de cargas

El sector presenta:

- Edad promedio elevada.
- Trabajo físicamente exigente.

- Mayor probabilidad de retiro anticipado.
- Mayor prevalencia de patologías crónicas.

Si el ratio sectorial interno se aproxima a 1,5 hacia 2040 bajo escenario inercial:

La carga contributiva relativa por trabajador del sector podría aumentar entre 50% y 65% respecto de 2026 para sostener simultáneamente:

- Beneficios previsionales,
- Estructura sanitaria vigente.

Este rango surge de combinar:

- Caída del ratio demográfico.
- Aumento del costo sanitario promedio.
- Menor base joven relativa.

En ausencia de incremento equivalente de productividad, esa carga adicional solo puede absorberse mediante:

- Aumento de aportes,
- Reducción de prestaciones,
- Transferencias externas.

6. Escenarios comparativos sectoriales

Escenario Inercial

- Sin salto de productividad.
- Sin reforma anticipada.
- Formalidad estable.

Resultado:

Alta probabilidad de ajustes estructurales entre 2038 y 2045.

Brecha contributiva creciente.

Presión financiera sostenida.

Escenario Reformado

- Ajustes paramétricos graduales.
- Gestión sanitaria preventiva intensiva.
- Mejora parcial de formalidad.

Resultado:

Reducción de la brecha proyectada.

Distribución intertemporal del ajuste.

Menor volatilidad financiera.

Escenario Tecnológico-Productivo

- Digitalización intensiva.
- Automatización parcial extendida.
- Aumento sostenido de la productividad sectorial.

- Reconversión del perfil laboral.

Resultado:

Mayor capacidad para absorber la carga contributiva.

Mitigación parcial del deterioro del ratio.

Reducción del impacto relativo del envejecimiento.

La automatización no elimina la restricción demográfica, pero puede reducir su impacto financiero relativo.

7. Diagnóstico estructural consolidado (2026)

Con la información disponible en 2026, bajo fecundidad persistente de 1,5 hijos por mujer:

- Argentina entrará en una fase de estrés previsional estructural entre 2035 y 2045.
- El ratio aportante/beneficiario tenderá a aproximarse a los umbrales críticos.
- El gasto sanitario promedio aumentará de forma estructural.
- En transporte de cargas, la convergencia de envejecimiento laboral y aumento de costos sanitarios amplifica la vulnerabilidad.

El cálculo simplificado indica que mantener los parámetros actuales podría requerir un incremento de la carga contributiva relativa del orden de 40% a nivel general y, potencialmente, superior al 50% a nivel sectorial bajo el escenario inercial.

No se trata de un escenario hipotético extremo. Es la trayectoria central bajo los supuestos demográficos actuales.

La variable determinante no es si habrá ajuste, sino bajo qué condiciones y en qué momento se materializará.

Fuentes del Anexo:

1. United Nations (2024). *World Population Prospects 2024 Revision*.
2. ANSES (2023–2025). *Boletines Estadísticos de la Seguridad Social*.
3. INDEC (2024–2025). *Encuesta Permanente de Hogares*.
4. OECD (2023). *Pensions at a Glance 2023*.
5. IMF (2024). *Fiscal Monitor: Managing Public Finances in Aging Societies*.
6. WHO (2022). *Global Health Expenditure Report*.
7. World Bank (2023). *Population Aging and Fiscal Sustainability*.